

Dicho DECRETO fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el JUEVES DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS entrando en vigor al día siguiente, es decir, el VIERNES DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS, de acuerdo con el artículo PRIMERO TRANSITORIO. Dicho decreto con su sola entrada en vigor me está ocasionando una afectación a mi Derechos Humanos, como lo haré valer en las páginas subsecuentes de la presente demanda constitucional, motivo por el cual acuso la INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA en mi contra, es decir, ataca el Decreto por tratarse de una norma AUTOAPLICATIVA.

¹ DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos", Diario Oficial de la Federación, Única Sección, No. 17 México, jueves 16 de noviembre de 2023, 1-7 pp. https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=309561&pagina=1&seccion=0

Dicho DECRETO fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el JUEVES DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS, entrando en vigor al día siguiente, es decir, el VIERNES DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES, de acuerdo con el artículo PRIMERO TRANSITORIO. Dicho decreto con su sola entrada en vigor me está ocasionando una afectación a mi Derechos Humanos, como lo haré valer en las páginas subsecuentes de la presente demanda constitucional, motive por el cual acuso la INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA en mi contra, es decir, ataco el Decreto por tratarse de una norma AUTOAPLICATIVA.”

SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El juicio de amparo se turnó inicialmente al Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien lo registró con el número ***** y se declaró legalmente **incompetente** por razón de territorio en favor de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

SEXTO. Turno. El dieciséis de junio de dos mil veinticinco, se turnaron los autos a la Ponencia, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

Así mismo, mediante el “Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se adscriben a las personas electas en el Proceso Electoral Extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, asimismo, se comisionan, reubican y readscriben, a personas funcionarias de los Órganos Jurisdiccionales, se designan y, en su caso, prorrogan a personas secretarias en funciones de Personas Juzgadoras”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de septiembre de dos mil veinticinco, se adscribió a este órgano colegiado a la **Magistrada Irais Berenice Galicia Cruz**, y se designó a la **licenciada María Alejandra Suárez Morales**, como Secretaria en funciones de Magistrada, en sustitución del Magistrado Arturo Iturbe Rivas, con efectos a partir del **quince de septiembre de dos mil veinticinco**.

JOSE EDUARDO CONTRERAS VARELA
706a6620636a66320000000000000000001f7e8
15/05/26 18:00:00



CONSIDERANDO:

Tales consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 98/2019(10a.)², sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN ANALÓGICA DE UNA

² Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época, libro 67, junio de 2019, tomo III, página 1987, registro 2020218.

JOSE EDUARDO CONTRERAS VARELA
706a6620636a66320000000000000000001f7e8
15/05/26 18:00:00

Derivado de lo anterior, se desestima la solicitud hecha por el recurrente para que la Suprema Corte de Justicia de Nación reasumiera su competencia originaria para conocer del presente asunto, pues como se demostrará más adelante, en el caso hay criterios obligatorios temáticos o analógicos que resuelven los temas de fondo inherentes a la constitucionalidad de las normas controvertidas.



SEGUNDO. Oportunidad. La promoción del recurso de **revisión principal** fue oportuna pues se presentó dentro de los diez días que establece el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, como se constata del cuadro siguiente:

Resolución Recurrida	Fecha de notificación	Surtió efectos.	Plazo de 10 días transcurrió.	Fecha de presentación del recurso.	Días inhábiles a la fecha de interposición del recurso.
28 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025 Notificación por lista	1 de abril de 2025	Del 2 al 15 de abril de 2025	11 de abril de 2025 (foja 26 del toca)	05, 06, 12 y 13 de abril de 2025

TERCERO. Legitimación. El recurso fue interpuesto por parte legítima, ya que lo presentó *****
 ***** , autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de ***** , quejoso en el juicio de amparo.

1. CUARTO. Antecedentes. El dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, ******* ***** ***** *******, por su propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y los actos siguientes:

“III. AUTORIDADES RESPONSABLES.

A. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

B. SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN; Y

C. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

IV. NORMA GENERAL Y ACTOS RECLAMADOS.

a) Al **PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**, le reclamo la PROMULGACIÓN y EJECUCIÓN del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos", en específico los artículos 1, 2, 3, fracciones I, XI, XXVIII BIS, 7, 12, 17 fracción IX, 21, fracción IV, incisos a), b), c) y d), 22, fracción VI, 33 fracción I, 91 último párrafo, 92, fracción I; y primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo Transitorios.

b) Al SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, le reclamo el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en específico los

c) Al **DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN**, le reclamo la **PUBLICACIÓN** del el **DECRETO** por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en específico los artículos 1, 2, 3, fracciones I, XI, XXVIII BIS, 7, 12, 17 fracción IX, 21, fracción IV, incisos a), b), c) y d), 22, fracción VI, 33 fracción I, 91 último párrafo, 92, fracción I; y primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo Transitorios.

d) De las autoridades antes mencionadas, reclamo todas las consecuencias y efectos inmediatos del el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.”

3. -QUINTO. Sentencia recurrida. En el juicio de amparo se **sobreseyó** respecto de los actos consistentes en la ejecución y el refrendo del Decreto reclamado.

4. Respecto de la ejecución, se dijo que no existían elementos que probaran la existencia de dicho acto y se sobreseyó con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo.

5. Por lo que hace al refrendo del Decreto en cuestión, se sobreseyó con base en el numeral 63, fracción V, en términos del 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, al no haberse expuesto conceptos de violación ni advertirse causa de pedir suficiente.

6. Por los demás actos, también se **sobreseyó** en el juicio bajo las siguientes consideraciones:

...a las "ma
positivo qu
o de pago
er un prem

sostenido
una auto
do que lo
nte identif
susceptib
orme al
que la a
contenida
ada de m
afectacion
r de dic
a.

Dichos ele
responder
mo “máqu

a debió
el quejos



18. Exterioriza que las disposiciones impugnadas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2023 y, conforme al artículo primero transitorio, entraron en vigor al día siguiente. Por tanto, su aplicación es inmediata y genera una afectación actual, concreta y jurídicamente relevante en la esfera de derechos del quejoso. Esto se evidencia en su constancia de situación fiscal, donde se señala que su actividad económica corresponde a “otros servicios recreativos prestados por el sector privado”. En consecuencia, se verían vulnerados sus derechos al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, al patrimonio, a la libertad de comercio y al juego, entre otros.

19. Lo anterior, en virtud de que las normas reclamadas imponen un régimen de sanciones administrativas y penales que habilita a las autoridades competentes para iniciar procedimientos en contra de quienes posean los bienes muebles referidos. Esta situación coloca al quejoso en un estado de vulnerabilidad jurídica, ya que los dispositivos de su propiedad podrían ser erróneamente

20. Que como fue expuesto en su demanda de amparo, el quejoso se dedica a una actividad vinculada con la industria del entretenimiento, sin que ello implique la operación de juegos de apuesta, azar o sorteos. No obstante, las disposiciones impugnadas afectan directamente su actividad económica, ya que algunos de los juegos que ofrece otorgan distintos tipos de premios. En ese sentido, el Decreto reclamado, al no establecer definiciones claras, genera un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica para sectores y actividades económicas que no están relacionados con juegos de apuesta o sorteos, lo que propicia condiciones para actos arbitrarios y excesivos por parte de la autoridad.

21. Asimismo, señaló que la modificación en la definición legal del término “máquina tragamonedas” le genera un perjuicio directo, ya que se le individualiza de manera absoluta al imponerle una obligación de abstención. Además, el juzgador omitió considerar que las reformas impugnadas también alteraron el concepto de “apuesta”, dejando abierta la posibilidad de que cualquier dispositivo que otorgue un premio sea considerado como máquina tragamonedas, independientemente de que dicho premio no dependa del azar, la suerte o la aleatoriedad. En consecuencia, cualquier aparato de juego que entregue un premio cuyo valor exceda el costo del juego será clasificado como máquina tragamonedas prohibida por la ley, lo que amplía de forma arbitraria el alcance de la prohibición y vulnera su actividad económica.

22. En consecuencia, sostiene que el Decreto impugnado establece una prohibición generalizada sobre todo tipo de aparatos de juego, únicamente por el hecho de que otorgan algún tipo de premio. Esto coloca su actividad dentro del ámbito de sanciones administrativas y penales, lo que podría obligarlo a cesar su



actividad económica. Tal situación lo expone a un estado de inseguridad e incertidumbre jurídica, derivado de la ambigüedad y vaguedad de las definiciones contenidas en la norma, poniendo en riesgo el ejercicio lícito de la actividad que actualmente desempeña.

23. Las pruebas ofrecidas en el juicio resultan suficientes para acreditar su interés legítimo, ya que es evidente que la sola entrada en vigor de las disposiciones impugnadas le genera una afectación actual, concreta y jurídicamente relevante. Aunque los aparatos de su propiedad no son máquinas tragamonedas, pueden ser erróneamente identificados como tales debido a la ausencia de una definición clara y una clasificación precisa en la normativa. En ese sentido, si bien las disposiciones reclamadas no le son directamente aplicables, dado que su actividad económica se encuentra registrada bajo el rubro de “otros servicios recreativos prestados al sector privado” y no como “Casa de Juegos Electrónicos”, lo cierto es que cuenta con un establecimiento mercantil destinado al entretenimiento, o bien coloca sus aparatos en locales comerciales cuyo giro es distinto al de casa de juegos electrónicos, lo que incrementa el riesgo de una aplicación indebida de la norma.

24. Expone que tiene derecho a ejercer un trabajo lícito, tal como se advierte de su constancia de situación fiscal, el cual ejerce con los aparatos de su propiedad, situación que acreditó con las facturas de su compra en los inmuebles indicados en los avisos de funcionamiento; por lo que, contrario a lo resuelto por la Jueza de Distrito, sí demostró su interés para promover el juicio.

25. Con base en el principio pro persona, el quejoso sostiene que la juzgadora de amparo debió reconocer que acreditó su interés legítimo, ya que el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a todas las autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. En ese

[illegible]

iones firm

que esa
do perjudic

Suprema (C
PARO. L
ARSE FIR

El planteamiento de la reforma se basa en lo señalado en el artículo 170.1 de la Constitución y en el interés jurídico de la unidad de la ley. El artículo 170.1 de la Constitución establece que la ley es una y única en todo el territorio de España. Este principio es el fundamento de la unidad de la ley, que es el principio que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. El interés jurídico de la unidad de la ley es el interés que tiene el Estado en garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Este interés es el fundamento de la unidad de la ley, que es el principio que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

cialmente
tinuación.

JOSE EDUARDO CONTRERAS VARELA
706a6620636a6632000000000000000000f7e
15/05/26 18:00:00



32. En relación con ello, el artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que quien promueva el juicio de amparo debe ser titular de un derecho o contar con un interés jurídicamente relevante respecto del acto reclamado. Esta disposición se armoniza con lo previsto en el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, como se expone a continuación.

1. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.”

33. En ese sentido, el juicio de amparo procede en favor de quienes ostentan la titularidad de un derecho o bien sufren una afectación jurídicamente relevante derivada de un acto de autoridad.

o del q
olítica de
ernacional
de los de
razón por
o, excluye

es legítimo
directos de
camente re
puede se
el orden ju
rgano jur
resión. En
senciales.

o resol
os o labo
subjetivo
ecir, para
ta o indir
ndispensab
implica un
de la titul

resolución
vos o la
de ampar
ridad de u
o bien,

o tampoco
aro. Por e
urídica de
una intron
particular

ó que el i
persona pro
a anulació
itivo en su
cho efect
mplica que
o eventual

és legítim
ca del pro
ial—, la c
nabilidad.
s utilizado
, sino a la
alegada.
razonable,
el acto re
n una mera

erés legítim
e el quej
Para e



establecer razonablemente la existencia de una afectación jurídicamente relevante en su esfera jurídica.

46. Asimismo, se afirmó que el interés legítimo tiene una aplicación especialmente útil en la defensa de intereses colectivos, lo que ha permitido justificar la legitimación procesal de entidades con base asociativa, como asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, en aquellos casos en que se busca proteger derechos o esferas jurídicas que trascienden lo individual.

47. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.)⁴, cuyo rubro y contenido son los siguientes:

"INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto –en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales–, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica –no exclusivamente en una cuestión patrimonial–, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre

⁴ Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página 60, con registro digital 2007921.

JOSE EDUARDO CONTRERAS VARELA
706a6620636a66320000000000000000001f7e8
15/05/26 18:00:00

es proce
autorida
co o legít
, al otro
e proced
raleza de
y la pre
frente al
e una a
la vía co

49. Se reitera que, para que proceda el juicio de amparo indirecto, es indispensable que la persona promovente demuestre

El resto de la doctrina, en cambio, sostiene que el contrato de compraventa resulta perfecto y definitivo desde el momento en que el vendedor entrega al comprador el bien que se ha vendido. Este tipo de contrato, según esta doctrina, produce efectos jurídicos desde el momento en que el vendedor entrega el bien que se ha vendido al comprador. Este tipo de contrato, según esta doctrina, produce efectos jurídicos desde el momento en que el vendedor entrega el bien que se ha vendido al comprador.

resulta p
na genera
. Este tip
momento
an a produ
to en que
ividual, ge
sujeto afe

e una n
e su entra
r para vi
contiene.
jurídicos
licaciones
vinculante
Suprema (

ción entre el
e generan
ad de ac
cambio, aque
nseguenci
en como “I
erio, el a
el cual s
de las c

58. Conforme a este criterio, el acto de aplicación se entiende como aquel mediante el cual se dispone de manera particular la ejecución efectiva de las consecuencias jurídicas



previstas en la norma respecto del quejoso. Es decir, se trata del acto que concreta el mandato normativo en una situación específica, generando una afectación directa en la esfera jurídica del individuo.

59. Este acto de aplicación no necesariamente debe emanar de una autoridad, ya que puede consistir incluso en un acto jurídico derivado de la voluntad del propio particular. Lo esencial en la afectación normativa directa es que siempre recae sobre el destinatario de la norma; lo que varía es el momento en que dicha afectación se produce, pudiendo ocurrir desde la entrada en vigor de la disposición o posteriormente, cuando se concreta su aplicación.

60. En contraste, cuando se trata de una afectación normativa indirecta, ya no resulta relevante determinar el momento específico en que el destinatario de la norma es afectado, pues dicha afectación no recae directamente sobre él —de lo contrario, se trataría de una afectación directa. En este caso, lo que se analiza es si, debido a la situación particular del promovente frente al orden jurídico, la norma genera una afectación diferenciada y jurídicamente relevante que justifique su legitimación en el juicio de amparo.

61. Conforme al criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁵, la afectación normativa indirecta se configura como una repercusión colateral que incide sobre el quejoso en su calidad de tercero —esto es, una persona que no ostenta el carácter de destinatario directo de la norma impugnada—. Tal afectación exige la existencia de una relación causal entre la norma general y la situación jurídica del quejoso, la cual debe ser concreta y verificable, excluyendo cualquier vínculo meramente hipotético, conjetural o abstracto. Esta afectación puede manifestarse en ámbitos económicos, profesionales, de salud pública o en cualquier otro que implique un interés legítimo tutelado

⁵ Ello se advierte de la tesis 1a. CCLXXXII/2014 (10a.), visible en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 8, julio de 2014, Tomo I, página 149.

62. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que el quejoso acude a este juicio constitucional con el propósito de controvertir una afectación normativa indirecta, la cual estima derivada de diversos artículos contenidos en el Decreto por el que se adicionan, reforman y derogan distintas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Tal afectación no se produce por la aplicación directa de las normas impugnadas, sino por los efectos jurídicos colaterales que estas generan en su esfera de derechos, en virtud de su situación particular frente al orden jurídico.

63. Lo anterior se sustenta en el hecho de que el quejoso se ostenta como persona física dedicada a la actividad económica consistente en la instalación y administración de máquinas de juego en establecimientos mercantiles de bajo impacto, tales como tiendas de bisutería, ropa, papelerías u otros similares. Esta actividad forma parte del grupo de servicios, subgrupo de juegos, y se caracteriza por ofrecer servicios de entretenimiento mediante aparatos electrónicos que operan con monedas o fichas. En virtud de dicha actividad, el quejoso ha adquirido diversos dispositivos de juegos electrónicos, cuya operación se ve potencialmente afectada por las disposiciones impugnadas del Decreto que reforma el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

64. En el juicio de amparo, la Juez de Distrito puntualizó que el quejoso impugnó los artículos 1, 2, 3 fracciones I, XI y XXVIII BIS, 7, 12, 17 fracción IX, 21 fracción IV incisos a), b), c) y d), 22 fracción VI, 33 fracción I, 91 último párrafo, 92 fracción I, así como la totalidad de los artículos transitorios del Decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. La impugnación



65. No obstante, atendiendo a la naturaleza de la actividad económica desarrollada por el quejoso, se concluye que los preceptos normativos que le generan un interés legítimo para acudir al juicio de amparo son los artículos 3, fracciones I y XI, 7 y 12 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. En consecuencia, la Juez de Distrito calificó su agravio en función de dichos artículos, al considerar que guardan una relación directa y concreta con la operación de máquinas de entretenimiento en establecimientos mercantiles de bajo impacto, actividad que el quejoso realiza de manera regular.

“ARTÍCULO 3. Para los efectos de este Reglamento, en lo sucesivo se entenderá por:

XI. Juegos con apuesta: Aquéllos señalados en el artículo 2 de la Ley y autorizados por la Secretaría;
[...].”

“ARTÍCULO 7.- Sólo podrán realizarse, operarse u organizarse juegos con apuestas y sorteos previstos en el artículo 2 de la Ley, previo permiso por escrito expedido por la Secretaría y conforme este reglamento.”

ARTÍCULO 12. *Quedan prohibidas las máquinas tragamonedas en cualquiera de sus modalidades.*

Se entiende por máquina tragamonedas todo dispositivo a través del cual la persona usuaria juega con apuesta, mediante la inserción de dinero en efectivo o cualquier otra forma de pago con la finalidad de obtener un premio.”

68. El quejoso sostiene que las personas físicas que poseen máquinas de juegos electrónicos instaladas en unidades económicas distintas —como tiendas de bajo impacto— tienen interés legítimo para impugnar las disposiciones del Reglamento, en virtud de que la definición normativa de “máquinas tragamonedas” y su prohibición inciden directamente en el desarrollo de dicha actividad económica. Esta afectación normativa indirecta se configura por el impacto concreto que dichas disposiciones generan en el uso, operación y viabilidad comercial de los aparatos de entretenimiento que forman parte de su giro mercantil.

69. Específicamente, el citado artículo 12 prevé la descripción y prohibición de las máquinas tragamonedas.

70. Asimismo, de la demanda de amparo se desprende (foja 122), que el quejoso exhibió, entre otras, lo siguiente:

JOSE EDUARDO CONTRERAS VARELA
706a6620636a63200000000000000000117e8
15/05/26 18:00:00



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

***** ** ** ***** ***** ***** ** ***** *****

***** **

***** ** ***** ***** ** *****

, documento en el que se

aprecia la actividad económica de otros servicios recreativos prestados por el sector privado con fecha de inicio el tres de mayo de dos mil veintiuno.

72. La documental consistente en una factura con el número de folio fiscal ***** , emitida por ***** a favor de ***** con RFC ***** el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, que ampara la adquisición del aparato de juego electromecánico consistente en una máquina pinball perla de oriente modelo 567 billetero.

73. La documental consistente en una factura con el número de folio fiscal ***** , emitida por ***** a favor de ***** con RFC ***** el catorce de marzo de dos mil veintidós, que ampara la adquisición de los aparatos de juego electromecánicos consistentes en dos máquinas pinball perla de oriente modelo 6 plus reconstruida y diez piezas de monedero TL.

74. La documental consistente en una factura con el número de folio fiscal *****
emitida por ***** a favor de *****
***** con RFC ***** el ocho de abril de
dos mil veintidós, que ampara la adquisición del aparato de juego
electromecánico consistente en una máquina pinball perla de oriente
modelo 6 plus reconstruida número de serie PP6P23.

75. La documental consiste en una factura con el número de folio fiscal ***** emitida por ***** a favor de ***** con REC ***** el ocho de abril de dos mil

ALEBAVZAPETITNO DOSE
89T10000000000000000C52d6c2dc05dd,dOT

00-00:81 dS\20\2L

76. La documental consistente en un recibo por el suministro de luz eléctrica expedido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a favor de *** ***, con fecha de corte el diecisiete de diciembre de dos mil veintitrés, respecto al domicilio ubicado en *** ***, *****

78. La documental consistente en un comprobante de pago con fecha del doce de octubre de dos mil veintitrés y número de comprobante: *********, emitido a través de la plataforma Mercado Pago a favor de la Comisión Federal de Electricidad por la cantidad de \$******* (***** ***** * **** ***** ***** ****)**.

80. La documental consistente en una factura de pago de impuestos de folio fiscal *****
***** emitida por el Municipio de Zinacantepec a favor de ***** ***** ***** con RFC ***** el seis de octubre de dos mil veintiuno, que ampara el pago de los conceptos: IMP. SOBRE DIVERSIONES JUEGOS Y



ESPECTÁCULOS IMP. SOBRE DIV., JUEGOS Y ESPECTÁCULOS
PUBLICOS.

81. La documental consistente en una credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral a favor de *****
***** ***** ***** , con vigencia del año dos mil quince al dos mil veinticinco, y número de IDMEX: *****.

82. Obran en autos documentos que, a juicio de este tribunal, resultan suficientes para acreditar que el quejoso se dedica, entre otras actividades, a la colocación y administración de máquinas de videojuegos en establecimientos comerciales cuyo giro no corresponde al de “casas de juego electrónicos”. Asimismo, se acredita que, en el marco de dicha actividad económica, el quejoso ha adquirido diversos aparatos de juegos electrónicos que operan mediante monedas. En consecuencia, se considera que cuenta con interés legítimo para impugnar el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, particularmente los artículos 3, fracciones I y XI, 7 y 12, por ser estos los que inciden directamente en la actividad que desarrolla.

83. Lo anterior se sustenta en que el quejoso, al operar máquinas electromecánicas accionadas mediante monedas, estima que el Decreto impugnado le genera un perjuicio derivado de la definición ambigua y confusa que el Reglamento otorga al concepto de “máquinas tragamonedas”. A su juicio, dicha definición no se ajusta a las características de los aparatos que utiliza en su actividad económica; sin embargo, la sola entrada en vigor del Reglamento lo coloca en una situación de prohibición o restricción operativa, sin que medie un acto de aplicación concreto, lo que configura una afectación normativa indirecta jurídicamente relevante.

85. Sin que sea necesario hacer un estudio más exhaustivo de las normas reclamadas para identificar una afectación normativa indirecta, atendiendo al carácter invocado por el quejoso.

86. Por lo anterior, este tribunal considera que en este caso, una persona física cuya actividad económica consiste en colocar o administrar máquinas de juegos que funcionan con monedas o fichas en negocios mercantiles con diverso giro al de “casas de juego electrónicos”, **sí tiene interés legítimo para impugnar las normas reclamadas, específicamente los artículos 3, fracciones I y XI, 7 y 12 del Reglamento en cuestión.**

87. La afectación que reclama el quejoso no es meramente hipotética ni abstracta, sino concreta y jurídicamente relevante, ya que el Decreto impugnado incide directamente en su actividad económica al prohibir la operación de máquinas electromecánicas accionadas por monedas, bajo una definición ambigua de “máquinas tragamonedas”. Esta restricción normativa, derivada de la sola entrada en vigor del Reglamento, le impide continuar con una actividad que constituye parte esencial de su fuente de ingresos y, por ende, compromete su subsistencia y la de sus dependientes económicos. Tal circunstancia configura una afectación normativa indirecta que justifica el reconocimiento de interés legítimo para impugnar la norma, conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación en relación con normas autoaplicativas y



restricciones que inciden en la esfera jurídica sin necesidad de actos concretos de aplicación.

88. Esa afectación económica está provocada por la modificación a la definición de lo que ha de entenderse por máquina tragamonedas.

89. Hasta este punto, debe quedar claro que el agravio expuesto acredita que al quejoso le asiste interés legítimo para impugnar las normas reclamadas, lo cual ha sido demostrado mediante los documentos previamente señalados. Este reconocimiento no implica, por sí mismo, que se haya acreditado una transgresión a sus derechos fundamentales, ya que dicha determinación corresponde exclusivamente al análisis de fondo del asunto, el cual deberá realizarse al estudiar los conceptos de violación planteados. En consecuencia, la procedencia del juicio de amparo se justifica en virtud de la afectación concreta y diferenciada que el ordenamiento impugnado genera en la esfera jurídica del quejoso, sin que ello prejuzgue sobre la constitucionalidad de las normas reclamadas.

90. Se estima aplicable, por el tema en estudio, la jurisprudencia PR.A.CN. J/46 A (11a.), Undécima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, enero de 2024, Tomo V, página 4312, cuyo contenido es el siguiente:

“INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUENTAN CON ÉL LOS SUJETOS COMERCIALIZADORES Y EXPENDEDORES DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA RECLAMAR DESDE SU ENTRADA EN VIGOR LOS ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN XXII, Y DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 8 DE ENERO DE 2020.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios divergentes al analizar la causa de improcedencia relativa a la falta de interés legítimo de los sujetos cuya actividad

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México determina que los sujetos cuya actividad consiste en la comercialización o expendio de gas licuado de petróleo, cuentan con interés legítimo para controvertir en el juicio de amparo indirecto los artículos 8, fracción XXII, y décimo sexto transitorio, de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial local el 8 de enero de 2020, en virtud de la posición jurídica en que se encuentran frente a tales porciones normativas y la afectación que éstas les producen.

JOSE EDUARDO CONTRERAS VARELA
706a6620636a66320000000000000000001f7e8
15/05/26 18:00:00



reclamadas, lo que implica que dejarán de realizar actos de comercio con las promoventes.”

91. Cabe precisar que el presente análisis no abarca todos los artículos reclamados en la demanda, ya que del contenido de los numerales 1 y 2 del Reglamento impugnado se advierte que estos se refieren, respectivamente, al objeto del Reglamento y a la exigencia de contar con permiso escrito expedido por la Secretaría de Gobernación para operar dichas actividades conforme al marco normativo.

92. Por su parte, el artículo 3, fracción XXVIII BIS, se limita a definir la Unidad de Medida y Actualización (UMA); mientras que el artículo 17, fracción IX, alude a la integración de una Base de Datos que incluirá, entre otros elementos, los procedimientos administrativos sancionadores en curso en materia de juegos con apuestas y sorteos, así como aquellos que se encuentren en litigio judicial, incluyendo los ejercidos contra permisionarios, accionistas o beneficiarios.

93. Por otro lado, el artículo 21, fracción IV, incisos a), b), c) y d), establece diversos requisitos que deben cumplir las personas morales para obtener un permiso en materia de juegos con apuestas y sorteos. Asimismo, el artículo 22, fracción VI, introduce requisitos adicionales aplicables exclusivamente a sociedades mercantiles que soliciten permisos para el cruce de apuestas en hipódromos, galgódromos y frontones, así como para la instalación de centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números o símbolos.

94. El artículo 33, fracción I, establece la vigencia de los permisos otorgados para la apertura y operación del cruce de apuestas en hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números o símbolos. Por su parte, el artículo 91 delimita las distintas modalidades de sorteos

95. El numeral 92, fracción I, se refiere a la posibilidad de otorgar permisos para la celebración de sorteos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades Federativas, de los Municipios y de las Alcaldías de la Ciudad de México.

1. La entrada en vigor del decreto.

3. Se refiere a los permisionarios que cuenten con autorizaciones de apertura y operación de establecimientos que aún no estén en funcionamiento, pueden solicitar la apertura siempre y cuando se ajusten al decreto.

JOSE EDUARDO CONTRERAS VARELA
706a6620636a6632000000000000000001f7e
15/05/26 18:00:00

egos con
tivas a la
e promovi
imismo, r
omos, ga
salas de
apertura y
o lado, ta
esta que i
áquinas tra
arte de
tidades fe
ende alg
contenido
de conform
e la Ley
avios, con
lueza de
edencia
de estudio
improce

de conformidad
de la Ley
avios, con
fuerza de
credencia

improce

funcional de
caso se

102.El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, sostuvo que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de



Amparo, referente a la falta de interés jurídico, ya que estima el Reglamento no le causa perjuicio alguno.

103.Aspecto que no se abunda, dado que fue analizado por la Jueza de Distrito y el cual fue materia de análisis en este fallo en el sentido de que se acredita el interés legítimo en favor del quejoso respecto de alguno preceptos y no cuenta con dicho interés en relación con el resto; de ahí que se estime innecesario su análisis en este apartado.

104. En otro aspecto, dicha autoridad responsable hizo valer que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, ambos de la Ley de Amparo, al reclamarse actos de naturaleza futura e incierta, pues aduce para ello que la quejosa señaló que no se le ha aplicado acto alguno relacionado con los preceptos impugnados, incluso que la demanda se promovió por el temor que le decomisen las máquinas electromecánicas operadas con monedas y con motivo de ello se le impida dedicarse a su actividad laboral, por ello estima que no se ha concretado en su perjuicio afectación alguna, ni tampoco existe certeza de que en algún momento el decreto reclamado le pueda afectar.

105.No obstante lo anterior, al haberse impugnado la norma como autoaplicativa, lo que implica que con su sólo inicio de vigencia causó perjuicio a la impetrante, ello incide en la determinación de que el acto reclamado es real e inminente, dado que del análisis que se realizó sobre el interés legítimo que tiene el quejoso para impugnar el Decreto reclamado, trae como aparejado que las consecuencias de éste sean reales, pues como ya se dijo, implica un no hacer en la demandante que es el no poder administrar sus máquinas electromecánicas operadas a base de monedas, ello ante la ambigüedad en la definición de lo que ha de entenderse como máquina tragamoneda; de ahí que no sea dable considerar actualizada la causal de improcedencia en cuestión, al

106. Y también hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que el Decreto reclamado no vincula a la parte quejosa por su simple entrada en vigor, sino que su individualización está condicionada a la existencia de un acto concreto de aplicación.

108.La clasificación que en ese precepto legal se realiza de las disposiciones generales, desde el punto de vista de sus efectos de individualización condicionada o incondicionada, en leyes heteroaplicativas y autoaplicativas, adopta como referente el momento en que cada una de ellas causa un perjuicio a sus destinatarios, lo que a su vez determina el momento oportuno para promover el juicio de amparo.

110. Por su parte, las normas autoaplicativas afectan a los particulares desde el inicio de su vigencia, pues la materialización de sus efectos no está sujeta a condición alguna.



“LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.”

112. De lo anterior se desprende que las normas reclamadas tienen la naturaleza de autoaplicativas, dado que desde la emisión del Decreto de reforma se estableció la prohibición general de realizar las actividades relativas a juegos con apuestas y sorteos no contemplados en la ley o el reglamento, aunado a que con la sola entrada en vigor de los artículos 3, fracciones I y XI, 7 y 12 del Reglamento, en su texto actual, implica la ampliación de los supuestos en los que puede considerarse a una máquina como

⁶ Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 5.

113. Derivado de que no existe diversa causa de improcedencia planteada en autos y este tribunal no advierte la actualización de alguna, lo que corresponde es levantar el sobreseimiento del juicio y examinar los conceptos de violación que con motivo de la decisión tomada en la sentencia recurrida, la juzgadora de primera instancia dejó sin resolver; ello, en términos del artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo.

114.DÉCIMO. Estudio de fondo del asunto. En los primeros dos conceptos de violación, el quejoso manifestó, en la parte que interesa, que forma parte de la industria del entretenimiento, específicamente en la operación de juegos electrónicos accionados mediante monedas. Esta actividad se desarrolla en sectores populares de la población, mediante la renta de espacios en establecimientos mercantiles cuyo giro principal no está relacionado con casas de juego electrónicos, tales como tiendas, papelerías, farmacias, restaurantes, entre otros. En ese contexto, el quejoso sostiene que las disposiciones impugnadas del Reglamento inciden negativamente en el desarrollo de dicha actividad, al generar restricciones que afectan su viabilidad operativa y económica.

115. Asimismo, el quejoso señaló que cumple con sus obligaciones fiscales respecto de la actividad económica que realiza, registrada bajo la denominación “otros servicios recreativos prestados al sector privado”. Conforme al Anexo 6 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 4 de julio de ese año, dicha actividad se encuentra clasificada dentro del grupo de servicios, subgrupo “apoyo a los negocios”, con la clave 1054. Esta categoría contempla expresamente la administración de máquinas de juegos electrónicos colocadas en otras unidades económicas, es decir, en negocios



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

mercantiles cuyo giro principal no corresponde al de casas de juego electrónicos. El quejoso argumenta que esta actividad tiene como finalidad apoyar a dichos establecimientos mediante la generación de un ingreso adicional, lo cual se ve obstaculizado por las disposiciones impugnadas, que imponen restricciones desproporcionadas y ajenas al marco normativo fiscal que reconoce y regula su actividad.

116.El quejoso también precisó que la industria a la que pertenece opera diversos modelos y tipos de aparatos electrónicos accionados mediante monedas, tales como la máquina de juego denominada “Pinball de Perla del Oriente”, simuladores de ruleta, entre otros. Aclaró que la actividad desarrollada no se vincula con juegos con apuesta ni sorteos, sino que forma parte de un gremio recreativo similar al de ferias y centros de entretenimiento familiar como *** ***** o ***** **. En estos espacios, la mecánica de juego se basa en la habilidad, la recreación y el entretenimiento, con la posibilidad de obtener premios, sin que ello implique la realización de apuestas. Esta distinción resulta relevante para efectos de la interpretación normativa, pues evidencia que la actividad del quejoso no se subsume en el régimen jurídico aplicable a juegos de azar, sino en uno de carácter recreativo y comercial lícito, reconocido por la propia clasificación fiscal y por el uso socialmente aceptado de dichos dispositivos.

117. En ese tenor, el quejoso advierte que, de asumirse que los juegos electrónicos ubicados en plazas comerciales no constituyen juegos con apuesta, sino actividades de mera recreación, pasatiempo y entretenimiento, mientras que los dispositivos que él opera sí se consideran juegos con apuesta únicamente por estar destinados a sectores populares o clases sociales económicamente menos favorecidas, se estaría configurando un trato discriminatorio. Tal diferenciación carece de justificación objetiva y razonable, y vulnera el derecho al trabajo en condiciones de igualdad, así como el derecho de los usuarios al libre

distinción económica en el artículo 1.º de la Ley de Interpretación de la Ley de los Juegos de Azar. En este sentido, la Ley de los Juegos de Azar no es aplicable a los juegos de azar que se celebran en los casinos de los municipios de los Juegos de Azar, sino que la Ley de los Juegos de Azar es aplicable a los juegos de azar que se celebran en los casinos de los municipios de los Juegos de Azar.

principio de le
le medidas

te en la c
eden otorg
upera el m
nedas" ad
y ambigü



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

incertidumbre jurídica, al permitir la aplicación de un reglamento que podría extinguir su actividad económica, a pesar de contar con autorizaciones legales otorgadas por autoridades municipales y estatales, cumplir con el pago de impuestos y derechos, y acreditar la adquisición lícita de los dispositivos mediante facturas y notas de venta expedidas por negocios debidamente establecidos. Tal situación vulnera el principio de legalidad, la seguridad jurídica y el derecho al trabajo, al someter al quejoso a un régimen normativo que permite sanciones arbitrarias y desproporcionadas.

120.El quejoso sostiene que resulta inconstitucional interpretar que únicamente los juegos previstos en el artículo 2 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos están permitidos, y que todos los demás se consideran prohibidos. Tal interpretación restrictiva ha sido desestimada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en precedentes relevantes. En la controversia constitucional 114/2013, el Alto Tribunal determinó que carece de fuerza argumentativa sostener que las máquinas tragamonedas están prohibidas de manera automática, por no estar expresamente contempladas en el catálogo de juegos permitidos. Asimismo, en la controversia constitucional 97/2004, la Corte reafirmó la necesidad de una interpretación conforme a los principios de legalidad, seguridad jurídica y libertad económica, evitando construcciones normativas que generen prohibiciones implícitas o por exclusión. Estos criterios refuerzan la postura del quejoso en cuanto a que la legislación reclamada vulnera derechos fundamentales al permitir una aplicación arbitraria y extensiva de prohibiciones no previstas expresamente por el legislador.

121.El quejoso sostiene que la norma reglamentaria reclamada vulnera los principios constitucionales de reserva de ley y subordinación jerárquica, al exceder el marco normativo establecido por la Ley Federal de Juegos y Sorteos. En particular, el reglamento introduce una prohibición expresa respecto de las máquinas tragamonedas y formula una definición de las mismas que resulta

regulado.
limitación
ejoso, al
gislador,
cional, q
y subor

de el decre
ar tipos pe
e a que la
una ley fo
cual cont
ora. Ade
e imprec
os del c
ormativo. E
bitraria de
n con clar
o. En con
ministrativ
cífica y pr
estándares

de el decre
personal
sos instru
da person



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

el quejoso ha demostrado que su actividad económica se realiza de manera lícita, con autorización de autoridades municipales y estatales, cumplimiento de obligaciones fiscales, y adquisición legal de los dispositivos mecánicos. Sin embargo, el sistema de prohibiciones establecido por el decreto impugnado incide directamente en el ejercicio de dicha libertad, al imponer restricciones que no se derivan de una ley formal y que afectan la autonomía personal de los usuarios para decidir cómo emplear su tiempo libre, incluso cuando lo hacen mediante prácticas lúdicas legítimas y responsables. Esta afectación resulta inconstitucional, al no superar un test de proporcionalidad ni atender a una finalidad legítima que justifique la restricción de derechos fundamentales.

124.El quejoso sostiene que el sistema de prohibición contenido en el decreto reclamado persigue fines externos como la protección de la salud pública y el mantenimiento del orden social. No obstante, dichos objetivos colisionan con diversos derechos fundamentales, entre ellos: el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de trabajo, el principio de taxatividad, la exacta aplicación de la ley, la subordinación jerárquica, la reserva de ley, la libertad de juego, la libertad de ocupar el tiempo en actividades recreativas, y la seguridad y certidumbre jurídica. Ante esta colisión de principios, resulta indispensable aplicar un test de proporcionalidad, conforme a los estándares constitucionales y convencionales, para determinar si la restricción impuesta supera los tres niveles de análisis: (i) si persigue una finalidad legítima; (ii) si es idónea para alcanzarla; (iii) si es necesaria, es decir, si no existen medios menos restrictivos; y (iv) si es proporcional en sentido estricto, es decir, si el beneficio obtenido justifica la afectación a los derechos involucrados. En el caso concreto, el quejoso argumenta que la medida impugnada no supera dicho test, al imponer una restricción excesiva y desproporcionada que afecta el núcleo esencial de derechos constitucionalmente protegidos.

125. Los conceptos de violación son fundados.

"En el considerando quinto de este estudio se precisó que todos los juegos de azar y juegos con apuestas están prohibidos en territorio nacional, con excepción de los mencionados en el artículo 2, fracción I, de la propia ley; de suerte que todo juego diferente de los permitidos por la ley, se considerará excesivo a la ley superior que se reglamenta; sin embargo, debe señalarse también que la valoración de este aspecto debe ser realizada en forma racional, teniendo presente las circunstancias actuales en materia de juegos y sorteos.

Los artículos 10 y 20, de la Ley Federal de Juegos y Sorteos expresamente disponen:

‘ARTÍCULO 2º- Sólo podrán permitirse:

II.- Los sorteos.

Si bien, el artículo 1o de la ley establece una prohibición general, en el sentido de que en el territorio nacional están vedados los juegos de azar y los juegos con apuestas, el mismo ordenamiento admite excepciones, pues precisa en su artículo 2° aquéllos que se encuentran permitidos.

129. Asimismo, el quejoso argumenta que la denominación utilizada en el Reglamento impugnado para referirse a las “máquinas tragamonedas” adolece de ambigüedad y falta de claridad, lo cual puede incidir negativamente en el ejercicio de derechos humanos de los usuarios, particularmente en lo relativo al libre desarrollo de la personalidad, al tratarse de una forma legítima de entretenimiento y esparcimiento. Con los elementos que obran en autos, es posible afirmar que el quejoso cuenta con un derecho aparente que merece tutela jurisdiccional frente a la medida restrictiva impuesta por el decreto reclamado.

JOSE EDUARDO CONTRERAS VARELA
706a6620636a66320000000000000000001f7e8
15/05/26 18:00:00

134. Por tanto, puede advertirse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la validez, entre otros, del artículo 3, fracción XXVII-BIS, del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en el cual se define el “sorteo de números o símbolos a través de máquinas” como una actividad en la que el participante, mediante un dispositivo de cualquier naturaleza sujeto al azar, realiza una apuesta introduciendo un billete, moneda, ficha o medio electrónico de pago, con el propósito de obtener un premio. Esta definición fue considerada constitucional por el Alto Tribunal, al encontrarse alineada con el marco legal previsto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

136.DÉCIMO PRIMERO. Efectos del amparo. Conforme al texto de los artículos 77⁷ y 78⁸ de la Ley de Amparo se debe proteger

El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado.



PRIMERO. Se **modifica** la sentencia recurrida.

⁹ *Jurisprudencia P./J. 112/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de mil novecientos noventa y nueve, página diecinueve, registro digital 192846.*

TERCERO. La Justicia de la Unión **ampara y protege**
 ***** , en contra de los artículos
3, fracciones I y XI, 7 y 12 del Decreto reclamado, por los motivos
 y para los efectos señalados en el y último considerandos de esta
 ejecutoria.

Notifíquese; con impresión de esta sentencia y la evidencia criptográfica correspondiente a las firmas electrónicas de las infrascritas, regístrese la ejecutoria en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; y en su oportunidad, archívese el expediente en que se actúa.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que integran la Magistrada Rosa González Valdés, (presidenta), la Magistrada Irais Berenice Galicia Cruz y la Secretaria en funciones de Magistrada María Alejandra Suárez Morales. Fue ponente la segunda de las nombradas.

Firman las integrantes de este tribunal colegiado con el
Secretario que autoriza y da fe.

MAGISTRADA PRESIDENTA:

PJF - Versión Pública



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

127951830_0015000038562870006.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 4

FIRMANTE					
Nombre:	JOSE EDUARDO CONTRERAS VARELA		Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA					
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f7.e8		Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	06/10/25 17:10:40 - 06/10/25 11:10:40		Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256				
Cadena de firma:	62 45 fc 87 4a 7d 6f 0d 08 e8 36 5e 3a ea 6c be 39 de a4 03 75 57 e0 61 aa af 61 1b ca 1e d5 af 7f 9b 0e f0 1f 2b 91 48 f7 24 0c 4b ee 36 82 23 6d d4 42 61 5f 7c 50 53 9a 2a ba dc 85 b2 f4 19 64 ed e6 6e c2 3c dc e6 19 28 dd 13 49 39 15 ea e0 18 9d 43 7a 7f 23 46 6f 18 f0 a1 56 0c e9 cb 6e d9 f5 19 7c 33 5c d2 93 8c 0a c8 13 d5 18 a3 76 fa bc c3 1b 92 83 1a e2 f8 3f 9a 56 52 94 82 0a 1d ac 65 84 03 6e 6d 9e 4a 12 7f f4 5a f9 53 f3 10 35 5a 0c 19 d7 62 d0 c4 4d bb 42 27 e4 a1 2d 72 7c aa b1 48 6d b5 62 61 56 dc 4b 09 3e fd bb 2a a8 f4 5f a6 19 15 79 a1 bb 29 79 dd ad 5c 0f 9c 43 95 13 8d 84 86 cb 73 89 06 19 32 c1 18 2c 7e 4f 94 d3 2c e3 58 e1 c1 74 bf f4 3b cd a4 77 03 65 d0 c5 60 eb 2b 2f af 74 40 57 0a 1c 07 2a 1e a8 18 ab 3f d1 6b 9e d1 63 d3 2f da 6d a1				
OCSP					
Fecha: (UTC/ CDMX)	06/10/25 17:10:40 - 06/10/25 11:10:40				
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f7.e8				
TSP					
Fecha : (UTC/ CDMX)	06/10/25 17:10:41 - 06/10/25 11:10:41				
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Identificador de la respuesta TSP:	61934445				
Datos estampillados:	dBRTwlcAtrPgYEBGOYSoq/vZWvs=				



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	IRAIS BERENICE GALICIA CRUZ		Validez:	BIEN Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.fc		Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	06/10/25 18:04:43 - 06/10/25 12:04:43		Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	10 c7 0f cf ed ac 48 22 01 e0 90 47 9a 91 43 e6 93 cd 20 c8 99 31 b3 67 83 69 07 85 6e c7 ae 78 a2 6a 14 fe 98 81 5e b7 91 8f 66 ec a6 d9 23 7d 9d 0d 88 d5 13 c0 35 c1 03 df f4 c3 28 07 55 00 66 5d 02 0b 6b 1b e7 a7 7c 8a e6 a6 a1 bc 95 5e 9e cd 1b 4e 76 bc cd 73 ab a8 fa 15 59 87 09 e8 70 0f ac c4 dd 18 2c d1 c1 3c d2 a8 7d 55 1c 8c 71 5c d8 55 31 88 e3 86 1d 7a 70 8e c7 10 14 13 af 47 4e c6 f7 29 ab 56 98 51 e3 e1 32 a9 3f df 37 47 80 da cd 77 35 d6 1c 50 58 71 3e b1 24 5c 50 24 e5 4a aa 39 2d c7 05 e7 ac 3e 9a 2d c0 66 7b 69 85 98 3b 32 19 d7 33 a7 84 a5 77 ce 2c d6 44 0d 21 5a 15 fc 29 6e 34 6d 38 36 24 be dd 9b b2 f0 c3 4f d1 0f d9 c1 33 1a 2d 5f 49 70 1c e5 b2 2d 93 9e 3d 6c bd 89 a0 81 a7 86 7c af cb b4 10 a5 50 5e 93 3e f4 1e c8 84 3f 5d cd 0d 65 30			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	06/10/25 18:04:43 - 06/10/25 12:04:43			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.fc			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	06/10/25 18:04:43 - 06/10/25 12:04:43			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	61998037			
Datos estampillados:	qBCFKbQNeOgPiKCo9PAWHeQKJSw=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	MARIA ALEJANDRA SUAREZ MORALES	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.23.06	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	06/10/25 18:12:10 - 06/10/25 12:12:10	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	5b 1e fd f8 6c 80 fa dc 9d 3f 93 a9 ca 5a 9a 2b 93 d1 3c f3 46 ad 0e 5c 25 42 fa d6 4a 32 b4 22 35 3e af 55 f2 07 f8 11 eb 4f 2d 2a ef 39 40 7c 88 2d 01 61 b6 8d 37 58 9d 38 26 47 dd bf 1d 87 2d 19 40 27 bf 7a 9e 96 95 3b 7a 31 d5 3a d7 a2 64 28 ee 0a 4c fe e1 49 8d c2 3e 23 fc 77 aa 37 e2 9e 6b 0d 92 d5 00 43 d7 04 34 d5 46 a7 2e f9 00 4d 6a a7 42 91 a2 fe 4f d2 60 c2 09 05 40 3e 67 7b d3 f8 2c 03 64 ef d6 14 6f 17 08 e1 88 a1 c8 5a 45 d0 d1 7f 70 c4 a4 3f 14 08 97 64 82 81 76 95 34 cf 25 4f 4d 57 dc 3b 50 02 6a af cf ff 5e b1 b2 b6 79 0b 22 68 d6 ca a3 4a df c8 aa 62 18 97 b3 bc 5e b9 9f 6a d9 8e 98 02 c9 6d 87 9f 52 92 f2 e4 2c 33 9c fe 83 7c 58 f3 0a 35 20 26 8b 18 cb 92 7d aa e4 82 ba b6 7d 59 2e c5 61 f3 09 ec 92 ec 8e f5 97 0b 21 0e 1b 35 af c2 74 8f			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	06/10/25 18:12:10 - 06/10/25 12:12:10			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.23.06			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	06/10/25 18:12:11 - 06/10/25 12:12:11			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	62007509			
Datos estampillados:	uFIQ5OhgZqn5B30NzCjBsF/KF0=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	ROSA GONZALEZ VALDES		Validez:	BIEN Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.09.dc		Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	06/10/25 18:39:52 - 06/10/25 12:39:52		Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	05 24 87 5b 93 51 03 6c e3 81 6e 3e ac 7e 18 53 04 ce 44 a4 3f db 90 23 29 9c d9 9a 12 1d e7 a5 5a fd 8e a2 db 9d e8 cb bc 98 90 1c 8c ad cb 67 d1 03 f6 c7 90 3a f3 ff 81 66 23 1f a8 5a b0 c6 1a 9b 94 8f 07 b7 d0 ae ee c5 99 ae 9a e9 09 67 5e e9 ca 0e 72 26 23 17 42 f3 46 cf b3 00 7b 56 65 ae ce 0c fe 37 c6 f7 65 4d 03 35 04 6e 79 7a f9 8b da 78 95 cb f7 41 f1 6e 07 4c af f1 e8 7f 6e 77 94 5a 8d 80 0b fa 2d 6e cb be ca 8e 59 54 ca 0b f4 73 a1 15 0f dd bd d8 24 86 ab 30 24 b6 cf c1 b4 70 46 f3 5d 27 b4 54 5f 75 ad 8b 40 a5 cb c2 ad 39 9b 8d 02 f0 94 ff c1 60 ba ad 33 d7 37 53 89 bf 40 81 af b0 60 31 23 38 5d cd 21 89 d4 e8 58 23 27 31 54 09 28 d0 e0 a4 67 d2 7f 0f c8 a6 a7 30 2a 03 7f ca ba 5e 63 89 bd 3c 83 6c c1 d8 be 27 66 76 a9 91 27 a9 b4 f2 96 7d 2c 74			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	06/10/25 18:39:53 - 06/10/25 12:39:53			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.09.dc			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	06/10/25 18:39:53 - 06/10/25 12:39:53			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	62042776			
Datos estampillados:	y7+qq186N+PbaruqdNSaZM848JE=			

El seis de octubre de dos mil veinticinco, el licenciado José Eduardo Contreras Varela, Secretario(a), con adscripción en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.